INICIATIVA QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 67 BIS A LA LEY AGRARIA, EN MATERIA DE REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES SOBRE TIERRAS EJIDALES O COMUNALES, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LAURA CRISTINA MÁRQUEZ ALCALÁ Y LAS Y LOS LEGISLADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Quien suscribe, diputada **Laura Cristina Márquez Alcalá**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al pleno de este órgano legislativo la presente **iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 67 Bis a la Ley Agraria, en materia de regularización de asentamientos humanos irregulares sobre tierras ejidales o comunales**, que se realiza conforme a lo siguiente:

Exposición de Motivos

La ocupación informal de tierras ejidales y comunales para fines habitacionales ha sido una práctica recurrente en México desde mediados del siglo XX, principalmente en zonas urbanas y periurbanas, como resultado de procesos de migración, expansión metropolitana desordenada, pobreza rural y ausencia de vivienda asequible. Esta realidad ha dado lugar a la existencia de **miles de asentamientos humanos irregulares constituidos sobre propiedad social**, cuya situación jurídica no está resuelta.

1. Raíces estructurales de la informalidad sobre tierras ejidales y comunales

Durante los años 60 y 70, el modelo de expansión urbana de las ciudades mexicanas estuvo marcado por la incapacidad del Estado para ofrecer suelo urbanizado a precios accesibles. Esta situación propició que muchas familias adquirieran, ocuparan o fraccionaran **tierras ejidales sin seguir los procesos formales previstos en la legislación agraria**, dando origen a asentamientos irregulares que hoy albergan a millones de personas.

Este fenómeno no fue un hecho aislado. En la actualidad, se estima que una parte importante del crecimiento urbano en las últimas décadas ha ocurrido sobre **suelo ejidal o comunal**, especialmente en los bordes metropolitanos de entidades como el Estado de México, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Puebla y Veracruz.

2. Datos actuales sobre la informalidad y la ocupación de tierras de propiedad social

De acuerdo con el **Registro Agrario Nacional (RAN)**, en México existen **cerca de 32 mil núcleos agrarios**, que abarcan aproximadamente **99 millones de hectáreas**, es decir, **más del 50 por ciento del territorio nacional** está bajo régimen de propiedad social (ejidal o comunal).¹ Estas tierras no pueden ser enajenadas libremente, salvo que se privatice su dominio mediante procesos formales como la adopción del dominio pleno, lo que en muchos casos no ha ocurrido.

En paralelo, el **Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus)** ha identificado que al menos **30 por ciento de los asentamientos irregulares en el país se ubican sobre terrenos de origen ejidal o comunal**, lo que impide avanzar en procesos de regularización urbana y dotación de servicios básicos.²

3. Falta de mecanismos normativos en la Ley Agraria

A pesar de la magnitud del problema, **la Ley Agraria no contempla actualmente un procedimiento expreso que permita a los núcleos agrarios regularizar asentamientos humanos ya existentes** sobre sus tierras mediante convenios avalados por la Procuraduría Agraria. La normativa actual se limita a:

- Reconocer la existencia de zonas de urbanización ejidal (artículos 63-67);
- Permitir el fraccionamiento de tierras para otorgar solares (artículos 68-69);
- Señalar como causa de utilidad pública la regularización de la tenencia del suelo (artículo 93, fracción V).

Sin embargo, en la práctica, **los procesos de regularización sobre propiedad social enfrentan vacíos legales y administrativos** que impiden brindar seguridad jurídica tanto a los habitantes como a los sujetos agrarios. Además, en muchos casos, los asentamientos irregulares se constituyeron con tolerancia tácita o incluso con autorización informal de comisariados o autoridades locales.

4. Importancia de fortalecer la participación de los núcleos agrarios con supervisión institucional

Reconocer legalmente la posibilidad de que los ejidos y comunidades **autoricen convenios de regularización mediante asamblea** permite canalizar institucionalmente una situación de hecho, dándole forma jurídica, evitando litigios y protegiendo derechos agrarios. La intervención de la **Procuraduría Agraria** garantizaría que se respete la voluntad de la asamblea, se eviten abusos, y se concilien los intereses de los núcleos agrarios con el derecho a la vivienda digna de los habitantes.

Este modelo ya ha sido explorado en programas piloto impulsados por el Insus, la Sedatu y gobiernos estatales, pero **sin un respaldo legal específico en la Ley Agraria**, lo que limita su cobertura, seguridad jurídica y replica.³

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

En México, uno de los principales obstáculos para la regularización de asentamientos humanos irregulares se encuentra en la complejidad legal y administrativa que implica la ocupación de **terrenos de propiedad social**, es decir, tierras ejidales o comunales. A pesar de que millones de personas habitan en viviendas ubicadas en este tipo de terrenos — muchas de ellas desde hace décadas—, **la legislación agraria vigente no contempla un**

mecanismo específico que permita resolver esta situación de manera ordenada, participativa y con respaldo jurídico.

1. Situación de hecho: asentamientos irregulares sobre propiedad social

Diversas investigaciones del **Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus)** han estimado que **alrededor del 30 por ciento de los asentamientos irregulares del país están ubicados sobre tierras de origen ejidal o comunal**, lo cual representa un serio obstáculo para su regularización jurídica y para la incorporación de sus habitantes a programas públicos de vivienda, servicios, infraestructura o escrituración.⁴

Estos asentamientos frecuentemente se ubican en las periferias de centros urbanos o en zonas rurales en proceso de urbanización. En muchos casos, se trata de terrenos que han sido fraccionados, vendidos o habitados con autorización informal, omisión deliberada o simplemente tolerancia de las autoridades agrarias locales. Sin embargo, al no existir una **ruta legal específica para regularizar estas ocupaciones**, las familias que los habitan quedan atrapadas en una condición de informalidad que vulnera sus derechos patrimoniales, sociales y urbanos.

2. Ausencia de un procedimiento legal para la regularización

La **Ley Agraria**, en sus artículos 63 a 69, contempla la posibilidad de delimitar zonas de urbanización ejidal, establecer reservas de crecimiento, fraccionar tierras y asignar solares. No obstante, **estos procedimientos están diseñados para planear el crecimiento futuro de los núcleos agrarios, no para atender asentamientos ya existentes** construidos fuera de ese marco formal.

La ley **no prevé la figura de un “convenio de regularización”** entre los núcleos agrarios y las autoridades locales o federales, aun cuando dichos convenios permitirían resolver de forma ordenada y pacífica la situación jurídica de miles de familias. Tampoco contempla la participación obligatoria de la **Procuraduría Agraria** como instancia garante, lo que genera inseguridad tanto para los sujetos agrarios como para los ocupantes.

3. Consecuencias sociales y jurídicas del vacío normativo

La falta de una solución normativa clara produce múltiples efectos negativos:

-Inseguridad jurídica patrimonial para millones de personas que no pueden escriturar la vivienda que habitan, a pesar de contar con posesión de buena fe durante años.

-Exclusión de servicios públicos por parte de los gobiernos municipales o estatales, al no poder incorporar dichos asentamientos a sus planes de infraestructura.

-Dificultad para acceder a programas de mejora o subsidios de vivienda, debido a la falta de documentos formales de propiedad.

-Conflictos legales latentes entre habitantes y núcleos agrarios, que generan tensiones sociales y riesgos de despojo o desplazamiento.

-Imposibilidad de heredar formalmente la propiedad, afectando la estabilidad intergeneracional de las familias.

Esta problemática afecta de forma más aguda a **personas en situación de pobreza, mujeres jefas de familia, adultos mayores y comunidades rurales indígenas**, quienes en muchos casos han construido su vivienda con recursos propios y sin apoyo institucional.⁵

4. Necesidad de una solución con enfoque comunitario e institucional

Para superar este estancamiento normativo es indispensable establecer una figura legal dentro de la Ley Agraria que **habilite a los núcleos agrarios, mediante acuerdo de asamblea, a celebrar convenios de regularización de asentamientos ya constituidos**, siempre que se garantice:

- El consentimiento de la mayoría calificada de los sujetos agrarios;
- La participación obligatoria de la Procuraduría Agraria como supervisora del proceso;
- El respeto a los planes de desarrollo urbano y al interés público.

Este mecanismo permitirá **reconocer la realidad social y jurídica de miles de asentamientos** que, si bien no se originaron dentro del marco legal formal, hoy representan comunidades consolidadas que demandan certeza patrimonial y acceso a derechos básicos.

Problemática desde la perspectiva de género

La desigualdad en el acceso a la tierra, la vivienda y la seguridad patrimonial en México tiene un **fuerte componente de género**, especialmente en contextos rurales y en asentamientos irregulares ubicados sobre propiedad social. Las mujeres —particularmente aquellas en situación de pobreza, madres solteras, adultas mayores o indígenas— enfrentan mayores barreras para acceder a la tierra en condiciones de igualdad, lo que se traduce en desprotección jurídica, vulnerabilidad económica y exclusión de programas de vivienda o regularización.⁶

1. Desigualdad estructural en la tenencia de la tierra

En México, el acceso a la tierra de propiedad social históricamente ha estado vinculado al rol masculino como “ejidatario” o “comunero”. Aunque las reformas al artículo 27 constitucional de 1992 abrieron la posibilidad para que las mujeres fueran reconocidas formalmente como sujetos de derechos agrarios, en la práctica, **las mujeres siguen siendo minoría entre los titulares de derechos en los núcleos agrarios**.

De acuerdo con datos del **Registro Agrario Nacional (RAN)** , sólo **el 28 por ciento de los certificados parcelarios** están registrados a nombre de mujeres, y menos del 20 por ciento de los cargos dentro de comités ejidales o comunales son ocupados por ellas.⁷ Esto refleja una exclusión estructural que limita su participación en las decisiones sobre el uso del suelo, incluyendo la posibilidad de intervenir en procesos de regularización o convenios de escrituración.

2. Impacto diferenciado en asentamientos irregulares

En los asentamientos humanos irregulares constituidos sobre tierras ejidales o comunales, las mujeres suelen tener una posición aún más precaria:

- Muchas **no figuran como propietarias** en documentos o contratos informales de cesión de derechos;
- Son **excluidas de los procesos de toma de decisiones comunitarias** , especialmente en contextos patriarcales;
- En casos de separación, viudez o violencia familiar, **enfrentan el riesgo de desalojo o despojo** por carecer de títulos que acrediten la posesión;
- La falta de escrituras impide su acceso individual a programas de mejora de vivienda, créditos, subsidios o regularización.

Esta situación configura una forma de **violencia patrimonial e institucional** , al negar a las mujeres los medios legales para proteger y formalizar su derecho a la vivienda.⁸

3. Vulnerabilidad jurídica y exclusión de políticas públicas

La ausencia de reconocimiento legal impide que muchas mujeres accedan a:

- Subsidios de vivienda rural o urbana** otorgados por organismos como la Conavi o Insus;
- Programas de reconstrucción en casos de desastre** , donde los requisitos de tenencia formal excluyen a muchas mujeres;
- Instrumentos de protección en juicios agrarios o civiles** , al no figurar en actas o registros formales.

Esto se traduce en **una reproducción de la pobreza y dependencia económica** , particularmente en zonas rurales y periurbanas con alta presencia de propiedad social.⁹

4. Necesidad de incorporar la perspectiva de género en la regularización agraria

La propuesta de adicionar el artículo 67 Bis a la Ley Agraria responde a esta problemática, al prever que los **convenios de regularización** entre núcleos agrarios y autoridades cuenten con **supervisión de la Procuraduría Agraria** , y se desarrollen bajo principios de:

- Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres ;
- Participación informada de las mujeres en la asamblea ejidal o comunal ;
- Prioridad para mujeres en situación de vulnerabilidad patrimonial ;
- Diseño y ejecución con perspectiva de género .

Esto permitirá avanzar en la **formalización de derechos patrimoniales de mujeres** que, si bien han habitado por años un terreno o vivienda, no han sido reconocidas legalmente como poseedoras.

Justificación

En México, la tenencia irregular de la tierra es una de las principales causas de exclusión social y patrimonial, especialmente cuando los asentamientos humanos se encuentran sobre **tierras de propiedad social** . La legislación agraria actual **no contempla mecanismos claros para su regularización** , lo que bloquea el acceso de miles de familias a servicios públicos, programas sociales y seguridad jurídica.

Más del **50 por ciento del territorio nacional** está constituido por terrenos ejidales o comunales bajo régimen de propiedad social, distribuidos en más de **32 mil núcleos agrarios reconocidos oficialmente**.¹⁰ En muchas de estas zonas, particularmente en regiones periurbanas, se han desarrollado **asentamientos humanos irregulares** que carecen de un marco legal que permita su incorporación ordenada al desarrollo urbano. La falta de un procedimiento normativo para regularizar estas ocupaciones perpetúa su condición de informalidad, genera tensiones sociales con los sujetos agrarios y dificulta la inversión pública en infraestructura y servicios básicos.¹¹

Si bien el artículo 93, fracción V, de la Ley Agraria reconoce como causa de utilidad pública la regularización de la tenencia del suelo, este concepto se aplica principalmente en procedimientos de expropiación y **no habilita a los núcleos agrarios para tomar decisiones directas** mediante asamblea sobre asentamientos preexistentes.¹²

La reforma que se propone busca llenar ese vacío legal mediante la creación del **artículo 67 Bis** , el cual permitiría a los núcleos agrarios —a través de asamblea con mayoría calificada— autorizar la celebración de **convenios de regularización** con autoridades municipales, estatales o federales, con la participación obligatoria de la **Procuraduría Agraria** como órgano garante del respeto a los derechos agrarios. Este enfoque mantiene el control de la tierra en manos del núcleo agrario, pero ofrece una vía jurídica clara para transformar ocupaciones de hecho en situaciones de derecho, y así cumplir con el mandato constitucional del derecho a una vivienda digna (artículo 4o. CPEUM) y la función social de la propiedad (artículo 27 CPEUM).

El fortalecimiento del marco normativo permitirá **coordinar esfuerzos intergubernamentales** , mejorar la gobernanza del suelo y atender una realidad social que

ya no puede resolverse exclusivamente mediante mecanismos tradicionales como la expropiación o la conversión individual al dominio pleno.

Asimismo, debe señalarse que la aplicación del presente artículo no sustituye los procedimientos agrarios establecidos para el reconocimiento, certificación o transmisión de derechos sobre la propiedad social. En aquellos casos en que el asentamiento humano se ubique sobre tierras parceladas o que requieran su incorporación al régimen de propiedad privada, los convenios de regularización previstos en este artículo deberán coordinarse con los procedimientos de certificación de derechos ejidales o comunales, adopción del dominio pleno o enajenación legal conforme a los artículos 23, 28, 56 y demás aplicables de la Ley Agraria. La Procuraduría Agraria podrá orientar técnicamente estos procesos complementarios, asegurando la seguridad jurídica tanto para los núcleos agrarios como para los habitantes beneficiarios.

Argumentos que la sustentan

Reconocimiento jurídico de una realidad social existente Millones de personas habitan en asentamientos humanos construidos en terrenos ejidales o comunales. Negar esta realidad o tratarla únicamente como una irregularidad legal impide avanzar hacia soluciones sostenibles. Esta reforma reconoce la existencia de dichos asentamientos y propone un mecanismo participativo, legal y supervisado para su regularización.

Fortalecimiento del régimen de propiedad social Lejos de debilitar al núcleo agrario, esta propuesta refuerza su autonomía, al permitirle tomar decisiones formales mediante asamblea sobre el destino de su tierra, conforme a procedimientos garantizados por la Procuraduría Agraria. Se evita la imposición unilateral desde autoridades externas y se garantiza el consentimiento agrario.

Atención prioritaria a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad

La mayoría de los asentamientos irregulares en tierras ejidales están habitados por personas que no cuentan con recursos para adquirir vivienda en el mercado formal. La reforma ofrece una vía legal de escrituración simplificada, alineada con los principios de justicia social, equidad territorial e inclusión urbana.

Facilita la planeación urbana con base en derechos humanos

Al permitir que los asentamientos se integren al ordenamiento territorial, se posibilita su incorporación a servicios básicos, infraestructura, transporte, drenaje, salud, educación y espacios públicos. Esto beneficia tanto a los habitantes como a las autoridades locales, que podrán invertir con mayor seguridad y certeza jurídica.

Fortalece la función conciliadora y garante de la Procuraduría Agraria

La intervención obligatoria de la Procuraduría garantiza que los convenios se celebren conforme a la ley, se respeten los derechos colectivos y se eviten procesos irregulares o

discrecionales. Se institucionaliza así una vía legal supervisada, en lugar de prácticas informales o clientelares.

Beneficios de la iniciativa

La adición del artículo 67 Bis a la Ley Agraria tendrá un impacto positivo en al menos cinco dimensiones clave: **seguridad jurídica, acceso a servicios, justicia agraria, gobernanza territorial y equidad de género**. Esta reforma propone un camino legal para resolver una situación social históricamente ignorada: la existencia de asentamientos humanos irregulares sobre terrenos ejidales o comunales que, al no contar con un marco de regularización específico, permanecen al margen del Estado de derecho y de la planeación urbana.

1. Seguridad jurídica para millones de personas

Se otorgará certeza legal a familias que han habitado terrenos de propiedad social por años, muchas veces de forma pacífica y con conocimiento de las autoridades locales. La iniciativa permitirá que, mediante un procedimiento legítimo —avalado por la asamblea agraria y supervisado por la Procuraduría Agraria—, se puedan formalizar estos asentamientos y proceder a su regularización jurídica, incluyendo procesos de escrituración. Esta medida beneficiaría directamente a una parte de las **más de 5 millones de viviendas en situación irregular identificadas por Insus**, muchas de ellas en terrenos ejidales o comunales.¹³

2. Acceso a servicios públicos y programas sociales

Los asentamientos regularizados podrán ser incorporados a los padrones y planes de desarrollo municipal, lo que facilitará su acceso a agua potable, energía eléctrica, pavimentación, drenaje, recolección de residuos, transporte público y seguridad. Además, las personas beneficiarias podrán acceder a programas federales y estatales como **Mejoramiento Urbano, Reconstrucción, Subsidios de Vivienda Conavi**, entre otros, los cuales actualmente les son negados por no contar con documentos de propiedad.¹⁴

3. Prevención de conflictos sociales y fortalecimiento del diálogo agrario

El mecanismo propuesto reduce la posibilidad de conflictos legales o enfrentamientos entre ocupantes y núcleos agrarios, al institucionalizar un procedimiento de **diálogo y conciliación** respaldado por la Procuraduría Agraria. Se protege así el principio agrario de autonomía de la asamblea y se evita que los conflictos terminen en tribunales o en despojos violentos.¹⁵

4. Mejora de la planeación territorial y urbana

La incorporación formal de los asentamientos al marco de desarrollo urbano permitirá a las autoridades locales y estatales planear de manera más eficiente el uso del suelo, respetando los principios de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano sustentable.

5. Avance en igualdad sustantiva y protección del derecho de las mujeres a la tierra

Al establecer la regularización bajo principios de equidad, la iniciativa abre la puerta a que **mujeres que encabezan hogares** o que han habitado viviendas sin reconocimiento legal puedan obtener su escritura, acceder a apoyos públicos o defender su patrimonio en casos de separación, viudez o violencia familiar. Esto combate directamente la **violencia patrimonial**, uno de los principales obstáculos para la autonomía de las mujeres en contextos agrarios.¹⁶

Para mayor referencia, se compara el texto vigente, con el texto que se propone adicionar y modificar:

LEY AGRARIA	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
SIN CORRELATIVO	<p>Artículo 67 Bis. - Los núcleos agrarios podrán autorizar, mediante resolución de asamblea conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24, y demás disposiciones aplicables de esta Ley, la celebración de convenios de regularización de asentamientos humanos irregulares ubicados en tierras ejidales o comunales.</p> <p>Cuando de dichos convenios deriven actos de transmisión de derechos, enajenación, aportación o asignación de solares sobre tierras de uso común o parceladas, deberán observarse las mayorías calificadas previstas en esta Ley, la presencia obligatoria de la Procuraduría Agraria y de fedatario público, así como la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional.</p> <p>Los convenios a que se refiere este artículo deberán sujetarse a:</p> <p>I. Los planes y programas de desarrollo urbano aplicables;</p> <p>II. Las restricciones ambientales, de conservación y de riesgo previstas en la legislación federal, estatal o municipal, y</p> <p>III. La normativa técnica en materia de urbanización, uso de suelo, infraestructura y servicios.</p> <p>Dichos convenios deberán prever mecanismos de escrituración y entrega de títulos que incluyan, como mínimo:</p> <p>a) Censo de ocupantes y beneficiarios;</p> <p>b) Padrón de solicitantes con datos verificables;</p> <p>c) Planos y deslindes certificados;</p> <p>d) Dictamen de compatibilidad urbana y de riesgo, y</p> <p>e) Mecanismos de solución de controversias y atención con perspectiva de género.</p>

En mérito de lo anterior, se somete a consideración de ese honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un artículo 67 Bis a la Ley Agraria, en materia de regularización de asentamientos humanos irregulares sobre tierras ejidales o comunales.

Artículo Único. Se adiciona un artículo 67 Bis a la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 67 Bis. Los núcleos agrarios podrán autorizar, mediante resolución de asamblea conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24, y demás disposiciones aplicables de esta Ley, la celebración de convenios de regularización de asentamientos humanos irregulares ubicados en tierras ejidales o comunales.

Cuando de dichos convenios deriven actos de transmisión de derechos, enajenación, aportación o asignación de solares sobre tierras de uso común o parceladas, deberán observarse las mayorías calificadas previstas en esta Ley, la presencia obligatoria de la Procuraduría Agraria y de fedatario público, así como la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán sujetarse a:

- I. Los planes y programas de desarrollo urbano aplicables;
- II. Las restricciones ambientales, de conservación y de riesgo previstas en la legislación federal, estatal o municipal, y
- III. La normativa técnica en materia de urbanización, uso de suelo, infraestructura y servicios.

Dichos convenios deberán prever mecanismos de escrituración y entrega de títulos que incluyan, como mínimo:

- a) Censo de ocupantes y beneficiarios;
- b) Padrón de solicitantes con datos verificables;
- c) Planos y deslindes certificados;
- d) Dictamen de compatibilidad urbana y de riesgo, y
- e) Mecanismos de solución de controversias y atención con perspectiva de género.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Procuraduría Agraria, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, expedirá los Lineamientos Generales para la celebración de convenios de regularización de asentamientos humanos irregulares en tierras ejidales o comunales, garantizando la participación de los municipios y demás autoridades competentes.

Tercero. La implementación del presente Decreto se sujetará a la disponibilidad presupuestaria aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente y demás ordenamientos aplicables; las dependencias responsables, en el ámbito de su competencia, realizarán los ajustes programático-presupuestarios necesarios para su adecuada ejecución.

Notas

1 Registro Agrario Nacional (RAN). (2024). "Núcleos agrarios registrados en México". Disponible en: <https://datos.ran.gob.mx/conjuntoDatosPublico.php>

2 [1] INSUS. (2023). "Informe de Resultados: Programa de Regularización de Asentamientos Humanos". Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/946735/15_PI_INSUS_AyR23_24.pdf

3 [1] SEDATU. (2022). Programa Nacional de Suelo 2021-2024. Disponible en: <https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-nacional-de-ordenamiento-territorial-y-desarrollo-urbano-2021-2024>

4 [1] INSUS. (2023). Informe de Resultados del Programa de Regularización de Asentamientos Humanos. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/946735/15_PI_INSUS_AyR23_24.pdf

5 INSUS. (2024). Evaluación de Consistencia y Resultados 2023-2024 del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/962556/Informe_final_de_la_Evaluacion_de_Consistencia_y_Resultados_2023-2024_del_Pp_S213_Programa_para_regularizar_Asentamientos_Humanos_.pdf

6 Procuraduría Agraria. (2021). Informe sobre atención a mujeres sujetas agrarias y acceso a la tierra. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/948038/PROCURADUR_A_AGRARIA_SEXTO_INFORME_DE_LABORES.pdf

7 Registro Agrario Nacional (RAN). (2023). Estadísticas sobre participación de mujeres en núcleos agrarios. Recuperado de: <http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero>

8 SEDATU, INSUS y CONAVI. (2022). Diagnóstico sobre la participación de las mujeres en la regularización de la tenencia del suelo. Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/936040/Diagnostico_del_Sector_Vivienda_VF.pdf

9 Procuraduría Agraria. (2021). Informe sobre atención a mujeres sujetas agrarias y acceso a la tierra. Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/948038/PROCURADUR_A_AGRARIA_SEXTO_INFORME_DE_LABORES.pdf

10 [1] Registro Agrario Nacional (RAN). (2023). Estadística con perspectiva de género. Recuperado de: <http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero>

11 Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). (2024). Avance y Resultados Enero 2023 – Junio 2024. Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/946735/15_PI_INSUS_AyR23_24.pdf

12 Procuraduría Agraria. (2023). Quinto Informe de Labores. Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/930932/5to_Informe_2023_PA.pdf

13 INSUS. (2024). Informe de resultados del Programa de Regularización de Asentamientos Humanos 2023-2024.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/946735/15_PI_INSUS_AyR23_24.pdf

14 SEDATU. (2022). Programa Nacional de Suelo 2021–2024.
<https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-nacional-de-ordenamiento-territorial-y-desarrollo-urbano-2021-2024>

15 Procuraduría Agraria. (2023). Quinto Informe de Labores.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/930932/5to_Informe_2023_PA.pdf

16 [1] Registro Agrario Nacional. (2023). Estadística con perspectiva de género en núcleos agrarios. <http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero>

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2025.

Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica)